

Amnistía Internacional

SUDAFRICA AFIANZAMIENTO DE LA PAZ

JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD TRAS EL LEVANTAMIENTO DE BOFUZATSUANA

29 de marzo de 1994

RESUMEN

Indice AI: AFR 53/20/94/s

DISTR: SC/PO/CC/CO/GR

En este informe se describen las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Bofuzatsuana en marzo de 1994 cuando, tras un largo periodo de represión política, los residentes del antiguo Estado autónomo finalmente consiguieron el derecho a unirse a sus compatriotas sudafricanos en los preparativos de las primeras elecciones multirraciales del país. Los dramáticos acontecimientos de la semana del 7 de marzo, que provocaron, en última instancia, la caída del gobierno draconiano del presidente Lucas Mangope, han sido muy difundidos. Los medios de difusión se centraron, sobre todo, en las incursiones que millares de paramilitares de derechas efectuaron en el territorio, la ejecución extrajudicial de dos miembros de uno de tales grupos paramilitares, los extensos saqueos y la destrucción de propiedades, entre ellas del gobierno, y el despliegue de las tropas de la Fuerza Sudafricana de Defensa (SADF) a última hora del 11 de marzo.

No obstante, Amnistía Internacional siente preocupación porque las circunstancias de la muerte de decenas de civiles negros a manos de los paramilitares blancos, la policía de Bofuzatsuana y la Unidad de Estabilidad Interna (ISU) de la Policía Sudafricana son menos conocidas. Es posible que 100 personas perdieran la vida y centenares más resultaran heridas. Observadores de derechos humanos han confirmado los nombres de 27 personas abatidas a tiros en el área de la capital de Bofuzatsuana, Mmabatho, su ciudad gemela, Mafikeng, y los pueblos circundantes, y de otras 27 que resultaron muertas en las regiones de Odi y Moretele, cerca de Pretoria. Aún restan por confirmar otras 31 muertes en estas dos regiones y otras muchas en zonas más alejadas de estos epicentros de las protestas contra el Estado autónomo. En opinión de Amnistía Internacional, numerosos fallecidos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos, del uso injustificado de fuerza letal por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o de homicidios arbitrarios por parte de paramilitares de derechas. En este informe se documentan las circunstancias de

algunas de estas muertes, así como otras agresiones contra detenidos y periodistas en Mafikeng, GaRankuwa, Taung y otras zonas de Bofuzatsuana ocurridas entre los días 7 y 13 de marzo.

El informe señala que, dentro del proceso de restablecimiento del orden en este territorio y de creación de un clima propicio para la celebración de unas elecciones libres y justas, es imperativo que el gobierno de Sudáfrica, el Consejo Ejecutivo de Transición y los administradores conjuntos recientemente designados, emprendan la labor de impartir a las fuerzas de seguridad locales formación sobre métodos de mantenimiento del orden público acordes con las normas internacionalmente admitidas sobre uso de la fuerza y armas de fuego, y sobre el trato que deben recibir las personas bajo custodia. Es necesario actuar de igual forma con la Unidad de Estabilidad Interna, cuyas unidades, según parece, operaron de acuerdo con una política de «disparar a matar» en algunas zonas de Bofuzatsuana situadas al norte de Pretoria. El programa de formación deberá impartirse contemporáneamente a la realización de una investigación exhaustiva e independiente de la participación de las fuerzas de seguridad en torturas, ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegales consecuencia del uso injustificado de fuerza letal contra manifestantes desarmados. Amnistía Internacional considera que una paz duradera en la región debe construirse sobre la base de exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad por sus actos y hacer, en alguna medida, justicia con las víctimas de estas violaciones de derechos humanos.

En las investigaciones independientes de los tiroteos y agresiones llevados a cabo por personas armadas de raza blanca, es necesario resolver urgentemente la cuestión de quién es el responsable de los muertos y heridos. Como se expone en el informe, la mayoría de las fuerzas de derechas se presentaron en el territorio a petición de las autoridades que gobernaban entonces en Bofuzatsuana y del dirigente del Frente Popular Afrikaner (Afrikaner Volksfront), general Constand Viljoen. Por lo menos, debería considerarse a estas personas indirectamente responsables de los actos de las fuerzas derechistas, a pesar de su posterior tentativa de declinar toda responsabilidad afirmando que las fuerzas del Movimiento de Resistencia Afrikaner (Afrikaner Weerstandsbeweging) de Eugene Terre'Blanche no habían sido invitadas y constituían una «horda indisciplinada». Las fuerzas reunidas en Mmabatho y Mafikeng no pudieron efectuar todos los tiroteos atribuidos a blancos armados. Una investigación adecuada deberá determinar si, como creen algunos observadores de derechos humanos, la atmósfera de permisividad creada por la convocatoria a la movilización lanzada por el general Viljoen el 10 de marzo, así como, posiblemente, la conducta de la Unidad de Estabilidad Interna, alentaron a los hombres que tomaron parte en los ataques de los distritos de Odi y Moretele. Deberá ponerse a disposición judicial y enjuiciarse con rapidez e imparcialidad a los responsables de herir o matar a civiles y periodistas desarmados. En términos más generales, urge que el gobierno sudafricano, con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo de Transición, prohíba a los ciudadanos la exhibición pública de armas y el entrenamiento de ejércitos privados.

PALABRAS CLAVE: EJECUCION EXTRAJUDICIAL1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / DETENCION EN REGIMEN DE INCOMUNICACION / ACTIVISTAS POLITICOS

/ ESTUDIANTES / PERIODISTAS / CONDUCTORES / CIUDADANOS EXTRANJEROS
/ MUJERES / MENORES / POLICIAL / FUERZAS PARAMILITARES / EMBARAZO
/ ELECCIONES / HUELGAS / LEGISLACION DE EMERGENCIA / CAMBIOS DE
GOBIERNO / GOBIERNOS ANTERIORES /

Estas páginas resumen el documento Sudáfrica: Afianzamiento de la paz: Justicia y responsabilidad tras el levantamiento de Bofuzatsuana (Indice AI: AFR 53/20/94/s) publicado por Amnistía Internacional el 29 de marzo de 1994. Las personas que deseen más información o emprender acciones sobre esta cuestión deberán consultar el documento completo.

**SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DK, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMINISTÍA INTERNACIONAL, S. L.**

Amnistía Internacional

SUDAFRICA
AFIANZAMIENTO DE LA PAZ

JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD
TRAS EL LEVANTAMIENTO DE BOFUZATSUANA



29 marzo 1994
Indice AI: AFR 53/20/94/s
Distr.: SC/CO/CC/PO/GR

SUDAFRICA
Afianzamiento de la paz

Justicia y responsabilidad
tras el levantamiento de Bofuzatsuana

Tras una interminable y tumultuosa semana de conflictos y política arriesgada, durante la que posiblemente perdieron la vida 100 personas y centenares más resultaron heridas, los habitantes del ex Estado autónomo nominalmente «soberano» de Bofuzatsuana finalmente consiguieron el derecho a participar en las elecciones sudafricanas. Los acontecimientos de la semana del 7 de marzo de 1994 han sido muy difundidos, sobre todo la dramática incursión de los grupos derechistas blancos en el territorio, la revuelta de algunos sectores de las fuerzas de seguridad de Bofuzatsuana contra el gobierno del presidente Lucas Mangope, la ejecución extrajudicial de dos heridos del Afrikaner Weerstandsbeweging (Movimiento de Resistencia Afrikaner), los extensos saqueos, la destrucción de propiedades, incluidas algunas del gobierno, y, finalmente, el despliegue de las tropas de la Fuerza Sudafricana de Defensa a última hora del 11 de marzo, después de lo que a los asustados residentes del territorio les pareció un interminable retraso.

Menos conocidas son las circunstancias de la muerte de decenas de civiles negros a manos de miembros de grupos paramilitares blancos, la policía de Bofuzatsuana y la Unidad de Estabilidad Interna de la Policía Sudafricana. En opinión de Amnistía Internacional, los fallecidos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos, del uso injustificado de fuerza letal por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o de homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por paramilitares de derechas. Los observadores de derechos humanos que entrevistaron a los testigos y heridos confirmaron los nombres de 27 personas abatidas a tiros en la zona de la capital de Bofuzatsuana, Mmabatho, su ciudad gemela, Mafikeng, y las poblaciones circundantes, así como los de otras 27 que murieron en las regiones de Odi y Moretele, situadas al norte de Pretoria. Amnistía Internacional ha sido informada también de que, según parece, otras 31 personas resultaron muertas durante los saqueos que se produjeron en estas dos últimas regiones, pero su identidad no se ha confirmado todavía. Entre estas 85 víctimas no figuran las personas que perdieron la vida en las zonas más alejadas de los epicentros de las protestas contra el Estado autónomo. Entre los fallecidos figuran Gift Kgosinewang Molalwe, de 18 años, quien murió el 11 de marzo cuando la policía de Bofuzatsuana dispersó una reunión pacífica de estudiantes en el pueblo de Maropeng, cerca de Kuruman; Anna Nakedi, de 52 años, abatida a tiros ese mismo día por unos hombres blancos que cruzaron en camiones el municipio negro de Montshiwa, cerca de Mmabatho, y 13 personas víctimas de los disparos efectuados por la Unidad de Estabilidad Interna en Mabopane, norte de Pretoria, entre los días 11 y 13 de marzo.

El gobierno sudafricano, el Consejo Ejecutivo de Transición y los administradores del territorio del ex Estado autónomo, recientemente nombrados, deben aprovechar la ocasión que les brindan los cambios que se han producido en el control político

desde el 11 de marzo para investigar exhaustivamente y con prontitud estas y otras muertes. Así, las autoridades de transición contribuirán a inculcar a las fuerzas de seguridad un nuevo sentido de que deben responder de sus acciones ante los ciudadanos y estar dispuestos a actuar dentro de los límites que estipula la ley. Al mismo tiempo, unas investigaciones justas, perceptibles por la opinión pública y eficaces contribuirán a reducir los temores que aún albergan los ciudadanos de Bofuzatsuana, sobre todo los habitantes de las zonas rurales más remotas, que han padecido durante largo tiempo un sistema de justicia más interesado en encubrir los abusos que en procesar a sus perpetradores.

Dentro del proceso de restauración del orden en el territorio de Bofuzatsuana y de establecimiento de un clima propicio para la celebración de unas elecciones libres y justas, es imperativo, además, que las autoridades impartan a las fuerzas de seguridad locales formación sobre métodos de mantenimiento del orden público acordes con las normas internacionalmente admitidas sobre uso de la fuerza y armas de fuego y sobre el trato que deben recibir las personas bajo custodia. Esta formación debe llevarse a cabo con el asesoramiento y la asistencia de expertos internacionales, entre ellos, miembros de las misiones de observadores de las organizaciones intergubernamentales que se encuentran actualmente en Sudáfrica¹. Asimismo, Amnistía Internacional considera que las autoridades deben garantizar a los ciudadanos el acceso a organismos de investigación eficaces, dotados de recursos suficientes, e independientes, facultados para recibir denuncias contra los miembros de las diversas fuerzas de seguridad, emprender investigaciones y recomendar procesamientos, cuando proceda. Además, deberán suspender de sus cargos a todos los oficiales de alto rango del ejército y la policía relacionados con los abusos del régimen anterior, implicados en ejecuciones extrajudiciales o que hayan consentido los homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por miembros de los grupos paramilitares de derechas.

La policía de Bofuzatsuana

En el momento de máxima agitación en Bofuzatsuana, varios cientos de agentes de policía se rebelaron abiertamente contra el gobierno del Estado autónomo y, el 10 de marzo, declararon que apoyaban al resto de los ciudadanos en sus peticiones de libertad para ejercer la actividad política, incluido el derecho a participar en las elecciones. Aparte de sus preocupaciones por la desigualdad en los salarios, la formación y otros aspectos de su trabajo, los policías disidentes exigieron que «nadie sea sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y que no se utilice a la policía para estos fines». Se negaron, también, a que los partidos políticos, incluido el gobernante Partido Demócrata Cristiano del presidente Lucas Mangope, utilicen a la policía como herramienta.

Los habitantes de Bofuzatsuana que tomaron parte en las manifestaciones públicas por las calles de Mmabatho y Mafeking

¹. Entre ellas, las de las Naciones Unidas, la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), la Organización para la Unidad Africana y la Unión Europea.

acogieron entusiásticamente el rechazo público de su papel, largo tiempo ejercido, de instrumentos de la represión por parte de estos policías. A partir del 7 de marzo, conforme las huelgas y protestas de funcionarios, trabajadores del sector sanitario, estudiantes y otras personas se incrementaron en la capital y otras ciudades y pueblos, la policía se volvió más violenta en su esfuerzo por sofocar las protestas. Según informes, el 7 de marzo, el presidente Mangope ordenó públicamente a la policía que agrediera a los funcionarios que se negaran a volver a su trabajo, así como a cualquier persona que participara en actividades políticas públicas, y que interrumpieran las actividades de «educación de los votantes». Entre otros incidentes, la policía lanzó gases lacrimógenos contra unos funcionarios, a los que golpeó, y atacó deliberadamente en dos ocasiones, con gases lacrimógenos, la sede de Mafikeng de la organización de derechos humanos Abogados en Defensa de los Derechos Humanos. Durante los dos días siguientes, la policía continuó utilizando gases lacrimógenos y agrediendo indiscriminadamente a todas las personas que encontró por las calles de la capital. El viernes 9 de marzo utilizaba ya munición real contra los manifestantes.

También se recibieron informes de detenciones, y la policía obstaculizó —incluso con amenazas de violencia— las tentativas de los abogados de acceder a los detenidos. Por ejemplo, en Borakalalo, norte de Zeerust, la policía interrumpió una reunión de educación de los votantes que tuvo lugar en un domicilio particular la noche del 9 de marzo, y detuvo a 15 personas. Utilizó gases lacrimógenos y agredió a los detenidos con sjamboks (látigos), porras y patadas. En la comisaría de Welbedacht, la policía negó el acceso a los detenidos a las personas que pretendían visitarlos; salieron en libertad aproximadamente 16 horas después. Presentaban señales de heridas y otras lesiones consecuencia de las agresiones. En otra ocasión, la policía detuvo el 7 de marzo a Joseph Seabelo, habitantes de Setlagole, sudeste de Mafikeng, y le interrogó acerca de los talleres de educación de los votantes que había organizado en la zona. Quedó en libertad al cabo de varias horas. A la mañana siguiente, unos 20 agentes de policía se presentaron en su domicilio y lo condujeron a la comisaría, según parece tras informar a los demás ocupantes de la casa de que obedecían instrucciones «superiores» y que pensaban matarlo. Los policías golpearon a Joseph Seabelo con palos y culatas durante unas tres horas, al parecer en presencia del oficial al mando de la comisaría, y le dejaron inconsciente. Por la tarde, un agente que no había tomado parte en las agresiones al detenido le llevó de vuelta a su casa. Ingresó en el hospital de Vryburg para recibir tratamiento de urgencia.

A pesar de la sublevación de varios centenares de agentes de policía, ocurrida el 10 de marzo, continuaron produciéndose violaciones de derechos humanos en la zona de Mafikeng-Mmabatho y en otros distritos de Bofuzatsuana, síntoma de las fuertes divisiones existentes en el seno de la policía y de la ausencia de un mando y un control efectivos. El 10 de marzo, en Bodibe, un pueblo del sudeste de Mafikeng, unos policías dieron muerte a tiros desde un vehículo blindado a Piet Vilakazi, de 15 años. El muchacho, quien, según los informes, estaba jugando en la calle cuando la policía efectuó los disparos, presentaba heridas de bala en las piernas, las manos y la espalda. Esa misma noche, Digwamaje Morwa, de 39 años, murió como consecuencia de los disparos que recibió

cuando unos policías les ordenaron a ella y a su compañero de viaje que salieran del vehículo en el que viajaban por una carretera próxima a la escuela de formación de la policía. El conductor consiguió escapar. El cuerpo de Digwamaje Morwa fue hallado al día siguiente; tenía heridas en la cara y la espalda. La mañana del 13 de marzo, la policía hirió gravemente a tiros delante de sus padres en Tlhabane, cerca de Rustenburg, a Jonas Montshwe, de 18 años. El 11 de marzo, la policía disparó contra Johanna Chauke, del municipio negro de Mamelodi, cuando bajaba de un taxi en Temba, causándole la muerte. El conductor del taxi intentó acudir en su ayuda, pero la policía le disparó varias veces.

El 10 de marzo, Julia Maine, de 42 años, volvía caminando a su casa de Pudimoe, Taung, cuando se encontró con un numeroso grupo de miembros de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano (ANC) que regresaban de una reunión. La policía de Bofuzatsuana acudió a dispersar a la multitud. Los policías increparon a Julia Maine, que está embarazada, la acusaron de pertenecer al ANC y la agredieron con la culata de un arma y porras. Tuvo que ser internada en un hospital y se teme por la salud del niño. También se recibieron informes de agresiones ocurridas en la comisaría de Temba, distrito de Moretele, tras las detenciones que se produjeron durante el fin de semana del 12 de marzo. Los detenidos, entre ellos David Mapanga, de 17 años, recibieron golpes de palos y culatas de rifle.

A pesar de las numerosas violaciones de derechos humanos contra residentes del Estado autónomo, el incidente que dominó la información de los medios de difusión sobre los acontecimientos de Bofuzatsuana fue la ejecución extrajudicial de dos miembros del Movimiento de Resistencia Afrikaner por un agente de policía, que tuvo lugar el 11 de marzo. Cuando unos vehículos que transportaban a miembros de dicho movimiento se retiraban de Mmabatho bajo escolta de la Fuerza de Defensa de Bofuzatsuana, algunos soldados dispararon contra el convoy, según informes porque desde él estaban disparando contra civiles negros desarmados que había en la carretera. Los tres ocupantes del último vehículo resultaron heridos en el tiroteo, ocurrido en el exterior del cuartel de la policía. Los soldados abatieron a un hombre, Sarel Fourie, cuando bajaba del coche. Después, los vehículos militares se alejaron. Al parecer, los otros dos hombres, Fanie Uys y Alwyn Wolfaardt, se rindieron a los policías que se habían arremolinado. Uno de ellos solicitó asistencia médica. Un coronel de la Fuerza de Defensa de Bofuzatsuna regresó al lugar, habló con los heridos, pidió por radio una ambulancia y volvió a irse. A continuación, según los periodistas que se encontraban presentes, un agente se destacó del grupo y disparó deliberadamente en el pecho uno de ellos y en la cabeza y en la espalda al otro, matándolos a los dos.

Según los informes, el general Jack Turner, a la sazón jefe de la Fuerza de Defensa de Bofuzatsuana, declaró el 14 de marzo que se había emprendido una investigación en gran escala para identificar a los asesinos de los tres miembros del Movimiento de Resistencia Afrikaner. No cabe duda de que los responsables de dichas ejecuciones extrajudiciales cometieron violaciones de derechos humanos y demostraron la existencia de problemas de falta de disciplina y formación, que tiene planteados desde hace largo tiempo en la policía de Bofuzatsuana. Sin embargo, para que una investigación resulte adecuada, debe ser manifiestamente

independiente y no llevarse a cabo bajo la autoridad de ningún oficial que haya consentido, realmente o en apariencia, los homicidios ilegales cometidos por los grupos paramilitares de derechas. Las autoridades del antiguo Estado autónomo deben realizar una investigación plenamente independiente no sólo de las muertes de los miembros del Movimiento de Resistencia Afrikaner, sino también del resto de las ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegales y agresiones a personas bajo custodia de la policía de Bofuzatsuana durante este periodo. Los sospechosos de violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de sus cargos a la espera de los resultados de la investigación, y los perpetradores de tales abusos deben ser procesados rápidamente y con las debidas garantías.

La Unidad de Estabilidad Interna de la Policía Sudafricana

La tarde del 10 de marzo, algunos miembros de la Unidad de Estabilidad Interna de la Policía Sudafricana se presentaron en la zona de GaRankuwa. No se sabe con certeza bajo qué autoridad operaban en el territorio de Bofuzatsuana en la etapa anterior a que el gobierno sudafricano y el Consejo Ejecutivo de Transición decidieran desplegar a la Fuerza Sudafricana de Defensa. Al parecer, la Unidad de Estabilidad Interna tenía instrucciones de sofocar cualquier disturbio, especialmente los saqueos de propiedades del gobierno, comercios y oficinas. El 14 de marzo se tenían informes de la presencia de miembros de esta unidad en otros lugares del territorio, incluidos Mafikeng y Mmabatho.

En algunas zonas, su método para sofocar los desórdenes públicos consistió en una política de disparar a matar. La Unidad de Estabilidad Interna llegó a Mabopane el 11 de marzo e intervino para impedir el pillaje generalizado, sobre todo en el principal centro comercial de la localidad. El 12 de marzo los edificios del centro ardieron. Según un informe, a la mañana siguiente unos habitantes de Mabopane encontraron los cuerpos de cuatro personas en los edificios incendiados; tres de ellas presentaban heridas de bala. A principios de la semana del 14 de marzo, cuando la Unidad de Estabilidad Interna se retiró de la zona, la policía local comenzó, al parecer, a investigar la muerte de 13 personas. Hasta los habitantes de la localidad que condenaron enérgicamente el pillaje creían que la Unidad de Estabilidad Interna había disparado deliberadamente contra personas que no constituían amenaza alguna para la vida humana y compararon esta conducta con la de los soldados de la Fuerza Sudafricana de Defensa, que solían lanzar gases lacrimógenos y efectuar disparos de advertencia por encima de la cabeza de la gente. Entre la noche del 10 de marzo y la tarde del 12 de marzo, alrededor de 198 personas de las zonas de GaRankuwa y Mabopane ingresaron en los hospitales para ser atendidas de heridas consecuencia de disparos de la Unidad de Estabilidad Interna, patrullas de civiles blancos y, en menor medida, la policía de Bofuzatsuana. Al menos una de ellas murió en el hospital como consecuencia de sus heridas. Además de estos muertos y heridos, los observadores de derechos humanos locales informaron a Amnistía Internacional que hay 31 cuerpos sin identificar, algunos de los cuales presentan quemaduras muy extensas, en varios depósitos de cadáveres y que la policía se muestra reacia a cooperar en sus labores de identificación.

Amnistía Internacional ha recibido informes de varios disparos mortales efectuados por miembros de la Unidad de Estabilidad Interna en Temba. El 11 de marzo, unos policías detuvieron un coche y apuntaron con sus armas a sus tres ocupantes. Los tres hombres se asustaron al ver las armas e intentaron huir. La policía, supuestamente, abatió a tiros a uno de ellos e hirió de gravedad a los otros dos; al parecer, todos quedaron tendidos donde habían caído. Ese mismo día, la Unidad de Estabilidad Interna disparó a Thomas Leketo en el pecho cuando entró a saquear una tienda de Temba y le dio muerte. Iba desarmado. Algunos residentes de dicha localidad se preguntan por qué estos policías fuertemente armados no rodearon el edificio, detuvieron después a Thomas Leketo y a las demás personas que había en la tienda y los entregaron después a la policía local para que ésta investigara los presuntos delitos.

También se acusó a la Unidad de Estabilidad Interna de agredir a personas en el momento de su detención o mientras registraban sus domicilios, supuestamente en busca de objetos robados. Por ejemplo, miembros de esta unidad detuvieron a William Kgwatlha, de 14 años, y su tío Joseph Mabitsela, cuando cruzaban en coche la zona industrial de Babelegi, Temba, hacia mediodía entre los turbulentos días 10 y 13 de marzo. Los policías los agredieron dentro de su vehículo blindado antes de conducirlos a la comisaría de policía de Temba. Quedaron en libertad sin cargos el 15 de marzo.

Aunque a última hora del 11 de marzo, el ministro de Orden Público, Hernus Kriel, declaró «zonas de disturbios» a 53 distritos, confiriendo a sus fuerzas de seguridad poderes de emergencia, el territorio de Bofuzatsuna, donde se produjeron los disturbios anteriormente expuestos, no estaba incluido en dicha declaración². Por consiguiente, aún no se sabe con certeza de quién partió la petición de intervención de las unidades de la Unidad de Estabilidad Interna que intervinieron en Bofuzatsuna, sobre todo de las que entraron en acción antes del despliegue de la Fuerza Sudafricana de Defensa, a última hora del viernes 11 de marzo, ni bajo que autoridad actuaban. Sin embargo, según la ley, el ministro de Orden Público es responsable de los actos de los miembros de las fuerzas policiales y debería ser citado para rendir cuentas de ellos en una investigación independiente de los tiroteos que se produjeron en GaRankuwa, Mabopane y Temba. Los investigadores deberán determinar la naturaleza de las armas utilizadas por las unidades de la Unidad de Estabilidad Interna que sofocaron los disturbios y si advirtieron suficientemente antes de abrir fuego. La investigación debería abordar también las denuncias de agresiones de miembros de dicha unidad contra residentes de estas zonas y del área de Mmabatho-Mafikeng. Urge derogar las disposiciones aún vigentes de la legislación sudafricana que, como señaló la misión

². Según esta declaración, el ministro declaró el estado de emergencia para "contener y combatir la posible extensión de los disturbios en el Estado autónomo durante la crisis". Tras las protestas de Nelson Mandela, presidente del Congreso Nacional Africano, porque el ministro no había, al parecer, consultado al presidente De Klerk, la Comisión Electoral Independiente y el Consejo Ejecutivo de Transición, ni tampoco al ANC, el ministro derogó las restricciones del estado de emergencia a medianoche del 13 de marzo.

de observadores de la Commonwealth en su informe de mayo de 1993, permiten a las fuerzas de seguridad justificar el uso de fuerza letal en circunstancias en que únicamente se encuentran amenazadas propiedades y no vidas humanas. Por último, la conducta de la Unidad de Estabilidad Interna destaca la urgente necesidad, tantas veces señalada, de impartir a la Unidad de Estabilidad Interna formación sobre métodos de mantenimiento del orden público acordes con las normas internacionalmente aceptadas sobre uso de la fuerza y armas de fuego, así como sobre el trato que deben recibir las personas bajo custodia. Para ello, debe contarse con el asesoramiento y la asistencia de expertos internacionales, incluidos miembros de las misiones de observadores de las organizaciones intergubernamentales.

Grupos paramilitares de derechas

La noche del 10 de marzo, varios miles de partidarios armados del Afrikaner Volksfront (Frente Popular Africano, AVF), entre los que había miembros del Movimiento de Resistencia Afrikaner, entraron en territorio de Bofuzatsuana y ocuparon la abase aérea de las afueras de Mmabatho. Se encontraban allí a petición del gobierno de Lucas Mangope, los dirigentes de la Fuerza de Defensa de Bofuzatsuana y el líder del AVF, general Constand Viljoen, que ese día había hecho un llamamiento convocando a las fuerzas del Frente Popular Afrikaner a través de la estación de radio derechista Radio Pretoria. Varios días más tarde, Constand Viljoen y otros responsables de la incursión se lavaron hipócritamente las manos ante la opinión pública de cualquier responsabilidad en la presencia del Movimiento de Resistencia Afrikaner. La estancia de estos paramilitares de derechas en la zona de Mmabatho-Mafikeng fue breve y trágica. Antes de ser arrojados, en un primer momento por elementos rebeldes de las fuerzas de seguridad de Bofuzatsuana y, posteriormente, por la Fuerza Sudafricana de Defensa a última hora del 11 de marzo, mataron a numerosos civiles negros desarmados y perdieron a tres de sus miembros.

Aunque el grueso de las fuerzas blancas de derechas llegó a Bofuzatsuana la noche del 10 de marzo, la mañana de ese mismo día Amnistía Internacional había recibido informes sobre tiroteos efectuados por hombres blancos armados. Unos hombres blancos no identificados dispararon desde un vehículo en movimiento contra cuatro residentes del pueblo de Mogogwe, cerca de Mafikeng, a los que hirieron. Según los testigos presenciales, los hombres dispararon indiscriminadamente mientras el coche circulaba por el pueblo. Entre las víctimas figuraron Gladys Mokgoro, que recibió un disparo en la cadera cuando se encontraba en el interior de su casa, y Jacob Mabona, herido en la parte izquierda de la mandíbula; el tiro le destrozó la lengua. El 10 de marzo, hombres blancos armados con rifles circularon por Mafikeng y Mmabatho en camiones especialmente pertrechados con escopetas y rifles. Como dijo un empleado de la oficina de Mafikeng de los Abogados en Defensa de los Derechos Humanos, se palpaba tal miedo en el ambiente que apagaron las luces de la oficina para evitar que los vieran por las ventanas. A primera hora de la tarde, algunas personas, entre ellas observadores de derechos humanos, abandonaron con su familia sus hogares ante el temor a perder la vida.

El terror se intensificó a la mañana siguiente como

consecuencia de la eficaz, aunque temporal, ocupación de las calles de Mafikeng-Mmabatho por las fuerzas de derechas, que declararon la zona «Volkstaat» (estado del pueblo afrikaner). Observadores de la Commonwealth, las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, acompañaron a varias personas, entre ellas observadores de derechos humanos, a la embajada de Sudáfrica en Mmabatho, donde se refugiaron de los tiroteos. En el curso del 11 de marzo, hombres blancos armados vestidos de color caqui que circulaban en sus vehículos cometieron, sin mediar provocación, varios homicidios deliberados y arbitrarios de civiles negros, entre ellos dos residentes del municipio negro de Montshiwa, Matshidiso Leinane, de 32 años, atacada delante de su casa, y un joven, Joseph Oarabile Mokgosana, quien resultó muerto cuando se alejaba del término municipal acompañado de su hermano. Anna Nakedi, de 52 años, cuya artritis le impidió alejarse corriendo de dos camiones que transportaban hombres blancos armados, fue abatida a tiros cuando intentaba ocultarse detrás de un árbol.

Algunos periodistas también sufrieron la violencia de las fuerzas de derechas. Dos corresponsales extranjeros, John Battersby, del Christian Science Monitor, y Paul Taylor, de The Washington Post, fueron atacados en tres ocasiones consecutivas cuando intentaron hablar con los hombres acampados en la base área alrededor del mediodía del 11 de marzo. La primera vez, tras aparcar su coche, dos hombres armados se acercaron a ellos y, segundos después de identificarse como periodistas, los sometieron a lo que ambos calificaron de «agresión desquiciada». Consiguieron escapar sin heridas graves y condujeron alrededor de un kilómetro por la carretera antes de acercarse nuevamente a observar la base. Desgraciadamente, sus agresores los vieron, saltaron de su camión con las armas desenfundadas y aporrearon el coche de los periodistas con las culatas de sus rifles, sacaron a John Battersby agarrándole por el cabello y le golpearon la cabeza contra el suelo; también propinaron puñetazos y patadas a los dos hombres y arrojaron una lata de gases de 10 kilos contra el parabrisas del coche. La tercera vez, los agresores obligaron al vehículo a salir de la carretera. Otros periodistas denunciaron también que habían sido víctimas de amenazas de violencia y que les habían arrebatado sus equipos a punta de pistola.

Durante este periodo, se recibieron informes de ataques de hombres blancos en otros lugares de Bofuzatsuana. En el área de GaRankuwa, miembros de raza blanca de una compañía privada de seguridad que custodia instalaciones industriales, la Compañía de Seguridad Counterforce, dieron muerte a tiros el 11 de marzo al estudiante de derecho de 21 años Lucas Buti Moremong. El día anterior había regresado de la Universidad del Norte para visitar a su familia, residente en GaRankuwa, donde murió. Personas de la zona afirman que se ha visto a los guardias de la Compañía de Seguridad Counterforce vestir uniformes del Movimiento de Resistencia Afrikaner en otras ocasiones. Un hombre blanco no identificado disparó contra Johannes Maswanganyi, del pueblo de Ramotse, cerca de Hammanskraal, cuando salía de trabajar en la zona industrial de Babelegi, Temba, el 11 de marzo. El agresor, que viajaba en un «bakkie» (furgoneta) Nissan rojo en el que iba una pasajera, efectuó los disparos cuando Johannes Maswanganyi bajó de su coche para recoger a un grupo de hombres. Las balas le hirieron en el abdomen y la parte derecha del pecho. El agresor se alejó. Como consecuencia

de este ataque no provocado, Johannes Maswanganyi tuvo que ser operado y pasó mucho tiempo en el hospital. Los habitantes del pueblo de Majaneng, cerca de Temba, denunciaron que unos hombres blancos que vestían uniformes color caqui desbarataron su proyecto de marchar sobre Temba el 10 de marzo lanzando gases lacrimógenos y disparando contra ellos. Esos mismos hombres volvieron el 13 de marzo, y el temor hizo que la gente se ocultara en sus casas. Se recibieron informes de heridas de bala, pero Amnistía Internacional desconoce la identidad de los heridos.

En las investigaciones independientes de incidentes con muertos y heridos, es necesario resolver urgentemente la cuestión de quién es el responsable de los tiroteos y agresiones llevados a cabo por personas armadas de raza blanca. Como ya se expuso al inicio de este apartado, la mayoría de las fuerzas de derechas se presentaron en el territorio a petición de los hombres que gobernaban entonces en Bofuzatsuana y del dirigente del Frente Popular Afrikaner, general Constand Viljoen. Debería considerarse, por lo menos, a estas personas indirectamente responsables de los actos de las fuerzas derechistas, a pesar de su posterior tentativa de declinar su responsabilidad afirmando que las fuerzas del Movimiento de Resistencia Afrikaner de Eugene Terre'Blanche no habían sido invitadas y constituían una «horda indisciplinada». Las fuerzas reunidas en Mmabatho y Mafikeng no pudieron efectuar todos los tiroteos atribuidos a blancos armados. Sin embargo, una investigación adecuada deberá determinar si, como creen algunos observadores de derechos humanos, la atmósfera de permisividad creada por la convocatoria a la movilización lanzada por el general Viljoen el 10 de marzo, así como, posiblemente, la conducta de la Unidad de Estabilidad Interna, alentaron a los hombres que tomaron parte en los ataques de los distritos de Odi y Moretele. Deberá ponerse a disposición judicial y enjuiciarse con rapidez e imparcialidad a los responsables de herir o matar a civiles y periodistas desarmados. En términos más generales, urge que el gobierno sudafricano, con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo de Transición, prohíba a los ciudadanos la exhibición pública de armas y el entrenamiento de ejércitos privados.

Conclusión y recomendaciones

Desde el 16 de marzo, los dos hombres designados Administradores Conjuntos de Bofuzatsuana por el gobierno sudafricano, de acuerdo con el Consejo Ejecutivo de Transición, gobiernan según los términos establecidos en el Decreto 1 de 1994, en el que se suspenden la mayoría de las disposiciones de la Constitución de la República de Bofuzatsuana, se faculta a los Administradores Conjuntos para enmendar o derogar las leyes vigentes y, con el asesoramiento del gobierno sudafricano y el Consejo Ejecutivo de Transición, promulgar leyes por decreto. En virtud de este decreto, la Ley sobre la Comisión Electoral Independiente (Ley 150 de 1993) y las demás leyes que rigen la transición³ son aplicables a este territorio. Los Administradores Conjuntos son responsables, entre otras funciones, de «restablecer

³. La Ley del Consejo Ejecutivo de Transición (151 de 1993), la Ley sobre la Independencia de las Emisiones de los Medios de Comunicación (153, de 1993), y la Ley Electoral (202 de 1993).

el buen gobierno... garantizar el mantenimiento de la paz y el orden en Bofuzatsuana... [y] adoptar las medidas necesarias para promover una actividad política libre y facilitar la celebración de unas elecciones libres y justas...». Los Administradores Conjuntos ejercen el poder bajo la supervisión del presidente del Estado sudafricano y con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo de Transición.

Como resultado de la agitación y los cambios en la autoridad política y el control de Bofuzatsuana, la Comisión Electoral Independiente ha podido finalmente adoptar las medidas para iniciar sus actividades y la labor de preparación de las elecciones en el territorio. Además, las misiones de observadores intergubernamentales han comenzado también a actuar en el antiguo Estado autónomo. El incesante despliegue de las tropas de la Fuerza Sudafricana de Defensa, especialmente si se tiene en cuenta que la población local no ha protestado por su comportamiento, contribuye a la creación de un ambiente propicio para la celebración de unas elecciones libres y justas. Además, Amnistía Internacional insta a los administradores conjuntos a que deroguen cualquier ley vigente en Bofuzatsuana incompatible con una actividad política libre y que confieren a las fuerzas de seguridad poderes draconianos. Es, asimismo, importante, que tanto antes como después de las elecciones, no se produzcan retrasos a la hora de abordar la necesidad de impartir a las fuerzas de seguridad del antiguo Estado «soberano» una formación adecuada y eficaz. Como ya se ha expuesto en este documento y en el anterior informe de Amnistía Internacional sobre Bofuzatsuana⁴, para esta formación deberá contarse con el asesoramiento y la asistencia de expertos internacionales, incluidos observadores de las organizaciones intergubernamentales. Al mismo tiempo, se emprenderá una investigación exhaustiva e independiente de la participación de las fuerzas de seguridad en torturas, ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegales consecuencia del uso injustificado de fuerza letal contra manifestantes desarmados. Amnistía Internacional considera que una paz duradera debe construirse sobre la base de exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad por sus actos y hacer, en alguna medida, justicia con las víctimas de estas violaciones de derechos humanos.

⁴. South Africa: Hostages to a Rightwing Agenda – Human Rights Violations against Bophuthatswana Residents on the Eve of the South African Elections (AFR 53/10/94), publicado el 7 de marzo de 1994.

INTERNO (sólo para miembros de AI) Indice AI: AFR 53/20/94/s
Distr: SC/PO/CC/CO/GR

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street
London WC1X 8DJ
Reino Unido

29 de marzo de 1994

A:Todas las Secciones
Encargados de prensa
Coordinadores de campaña
Coordinadores de Sudáfrica y la RAR de Africa Meridional
Grupos con Expedientes de Acción de Sudáfrica

De:Departamento de Investigación de América (Equipo de Sudáfrica)

SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL
ANTES DE REPRODUCIRLA O DISTRIBUIRLA
PARA USO EXTERNO

SUDAFRICA

Afianzamiento de la paz

Justicia y responsabilidad tras el levantamiento de Bofuzatsuana

RESUMEN

Este documento forma parte de una serie sobre Sudáfrica que se está publicando antes de las primeras elecciones multirraciales que se celebrarán en el país, previstas para los días 26 a 28 de abril, así como de la Campaña sobre Desapariciones Forzadas y Homicidios Políticos. Los documentos anteriores son:

South Africa: Policing, Human Rights and the Prospects for Free and Fair Elections (Indice AI: AFR 53/09/94).

South Africa: Hostages to a Rightwing Agenda - Human Rights Violations against Bophuthatswana Residents on the Eve of the South African Elections (Indice AI: AFR 53/10/94; y el servicio de noticias 44/94, AFR 53/WU 03/94, del 7 de marzo de 1994).

En el presente documento se actualiza la información de AFR 53/10/94, difundido el 7 de marzo de 1994 -cuatro días antes de la fecha de publicación prevista- en respuesta a la crisis desatada en Bofuzatsuana. En este documento se describen las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el levantamiento y se revisan las recomendaciones de Amnistía Internacional ante la caída del gobierno del presidente Mangope y los cambios políticos resultantes.

Esperamos que las Secciones y las estructuras de miembros puedan aprovecharlo al máximo, de la forma en que se lo permitan sus recursos y en el contexto de sus planes y actividades para la Campaña sobre Desapariciones Forzadas y Homicidios Políticos. Les

rogamos que lo utilicen para actualizar la información remitida en la circular sobre Sudáfrica de dicha campaña (ACT 33/33/93/s) y para incrementar la eficacia de sus acciones. **Podría serle muy útil a las personas que realizan actividades con los medios de comunicación, tienen contactos con los propios gobiernos o efectúan labores de difusión.**

DISTRIBUCION

El SI ha enviado directamente este documento a los miembros de AI indicados anteriormente. También lo ha remitido a los organismos y personas influyentes de Sudáfrica a quienes se han enviado los documentos anteriores de la serie, esto es, a las autoridades sudafricanas, miembros importantes del Consejo Ejecutivo de Transición y de la Comisión Electoral Independiente y jefes de las misiones de observadores (Naciones Unidas, Unión Europea, Mancomunidad de Naciones [Commonwealth] y Organización para la Unidad Africana), así como a los contactos en el mundo de los derechos humanos, las finanzas y otros ámbitos, y a determinados periodistas de ese país).

ACCIONES RECOMENDADAS

Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de la Sección reciben ejemplares a su atención y que el documento se archiva debidamente para futuras consultas. Se ruega, además, que emprendan el mayor número posible de acciones entre las que figuran a continuación.

Nota sobre evolución política y estrategia

Como consecuencia del levantamiento popular que tuvo lugar en Bofuzatsuana la semana del 7 al 14 de marzo de 1994 y el derrumbamiento del gobierno del presidente Mangope, el gobierno sudafricano, con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo de Transición, designó dos administradores que gobernarán el territorio hasta las elecciones de los días 26 a 28 de abril. El presidente Mangope, su gabinete y el ex jefe de policía de Bofuzatsuana ya no ocupan ningún cargo de autoridad. Los administradores conjuntos ejercen el poder bajo «la supervisión del presidente del Estado y con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo de Transición».

En el contexto de la estrategia fijada para la Campaña sobre Desapariciones Forzadas y Homicidios Políticos en ACT 33/33/93/s y en las Acciones Recomendadas internas que acompañaban el documento AFR 53/04/94, por favor utilicen este documento, sobre todo, para

—inculcar a los gobiernos de todo el mundo que durante el levantamiento de Bofuzatsuana, los habitantes del antiguo Estado autónomo presuntamente «soberano» fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos paramilitares de derechas, y hacer hincapié en la necesidad de que se realicen investigaciones exhaustivas y procesamientos rápidos para impedir que se repitan abusos de esta índole en esta u otras zonas con anterioridad a las elecciones;

-inculcar a los gobiernos del mundo que su constante vigilancia y presión pueden contribuir a impedir un deterioro similar en la situación de los derechos humanos de otros lugares de Sudáfrica (por ejemplo, Natal, KwaZulu) durante el inestable periodo anterior y posterior a las elecciones;

-seguir alentando a los gobiernos extranjeros que han enviado misiones de observadores a Sudáfrica durante el periodo pre-electoral a que envíen algunos observadores al territorio de Bofuzatsuana, incluidas las zonas rurales remotas, alejados del escrutinio público, y a que presten especial atención a otras zonas donde las violaciones de derechos humanos y la violencia política amenazan las perspectivas de unas elecciones libres y justas.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional se exponen con más detalle al final del documento.

Por favor, utilicen este documento en la mayor medida posible para:

1. Hacer campaña en el propio país, a través de llamamientos al propio gobierno y a los parlamentarios, publicidad y actividades de difusión.

2. Dirigirse directamente a Sudáfrica, sobre todo en el contexto de visitas o cartas a la embajada de Sudáfrica en el propio país.

3. Se insta a las Secciones que aún no hayan realizado visitas al propio gobierno o a la embajada de Sudáfrica dentro de la Campaña sobre Homicidios Políticos y Desapariciones, o que consideren apropiado realizar nuevas visitas, a que lo hagan, si es posible, antes del 15 de abril.

4. Las Secciones de los países de la Unión Europea y la Commonwealth que emprendan contactos con el gobierno del propio país o la embajada de Sudáfrica deberán mencionar específicamente el importante papel que están desempeñando los observadores internacionales en la vigilancia de la violencia política y la conducta de las fuerzas de seguridad del Estado.

5. Las Secciones de los países de la Unión Europea utilizarán este documento para la captación constante de apoyos entre los funcionarios de los gobiernos de la UE y los miembros del Parlamento Europeo, tal y como se pide en la circular «South Africa: Human Rights and the Election Process – Recommended Actions for Sections in EU Member States», publicada el 17 de marzo de 1994 por la oficina de Amnistía Internacional en el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas.

6. Se ruega a los encargados de prensa de las Secciones que llamen la atención de los medios de difusión que tengan previsto viajar a Sudáfrica para informar sobre las elecciones sobre este documento.

7. Por favor, utilicen otros documentos, como las acciones urgentes, que se han publicado recientemente o puedan publicarse en las semanas que faltan para las elecciones para complementar las actividades, de conformidad con esta estrategia.